

Doctor
JULIÁN ANDRÉS VELASCO ALBÁN
Juez
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

Proceso: **76001 33 33 006 20220020600**
Medio de Control: Reparación Directa
Demandante: YENNIFER GALARZA HURTADO Y OTRO
jennifergalarza720@gmail.com
hoyosjf@hotmail.com

Demandado: Distrito Especial de Santiago de Cali
notificacionesjudiciales@cali.gov.

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA EN EL PROCESO EN DE REPARACIÓN DIRECTA CON RADICADO: 76001 33 33 006 20220020600.

CESAR AUGUSTO VALENCIA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.656.707 de Cali -Valle, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 93.986 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo : cesarnegritudes@hotmail.com , reportado en el registro nacional de abogados ,actuando según poder especial otorgado en sustitución por la Dra. MARIA DEL PILAR CANOS STERLING, identificada con Cedula No 31.869.025, expedida en Cali (V), en su condición de Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica de la alcaldía del municipio Santiago de Cali, quien tiene delegación en materia de representación judicial y extrajudicial por parte del señor Alcalde según los documentos anexos que acompañan el presente escrito y dentro del término de ley, comedidamente procedo, en primer lugar, a CONTESTAR LA DEMANDA propuesta por la señora YENNIFER GALARZA HURTADO Y OTRO en contra del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, acompañada de LLAMAMIENTO EN GARANTIA, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho, en los siguientes términos:

I. OPORTUNIDAD

Teniendo en consideración que la notificación electrónica del auto interlocutorio 714 del 11 de octubre de 2022 se efectuó el día 25 de octubre de esta anualidad, se concluye que este escrito es presentado dentro del tiempo previsto para tal efecto.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

FRENTE A “HECHOS Y OMISIONES” DE LA DEMANDA



1. “El día 25 de julio de 2020, a eso de las 16:53 horas la señora Yennifer Galarza Hurtado, venia conduciendo en compañía de su menor hija María Catalina Pizo Galarza su motocicleta de placas DCX-OIB sobre la Calle 70 en la intersección de la Carrera Ira, Barrio Alcázares de la ciudad de Cali Valle”:

- Este hecho no nos consta de manera directa, pues no conocemos que el día 25 de julio de 2020, a eso de las 16:53 horas la señora YENNIFER GALARZA HURTADO se encontrara conduciendo la motocicleta de placas DCX-OIB sobre la Calle 70 en la intersección de la Carrera 1ra, Barrio Alcázares de la Ciudad de Cali -Valle. Lo anterior, toda vez que, en primer lugar, un Representante del Distrito de Santiago de Cali no se encontraba en el lugar de los hechos, correspondiendo a la parte actora acreditar tal hecho.

2. “En el día, hora y lugar, que se desplazaba mi poderdante, sufrió una caída aparatosa al caer en un hueco prominente que sobre la vía había sobre la Calle 70, resultando lesionada y con consecuencias en su salud que hasta el día de hoy persisten con graves secuelas en su motricidad y funcionalidad”:

Sobre este hecho no nos consta de manera directa que la caída haya ocurrido por un hueco en la vía, lo cual está sustentado en unas fotografías.

Así mismo, las fotografías aportadas no dan cuenta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en las que aparénteme ocurrió el hecho, por lo tanto, no podrán ser tenidas en cuenta por el Juez para acreditar la ocurrencia del hecho.

El Consejo de Estado en sentencia del 13 de junio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Enrique Gil Botero, **Radicación número: 08001-23-31-000-1997-11812-01(27353)**, ha señalado que las fotografías por sí solas no dan cuenta del tiempo, modo y lugar en la que ocurrió un hecho:

“(…) FOTOGRAFIAS - Pruebas documentales. Valor probatorio. Valoración probatoria Sobre la posible valoración de las fotografías que fueron allegados al proceso por el demandante, y que pretenden demostrar la ocurrencia de un hecho, debe precisarse que éstas sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso. (...) se tiene que las fotografías son pruebas documentales que el juez está en la obligación de examinar bajo el criterio de la sana crítica, siempre y cuando se hayan verificado los requisitos formales para la valoración de ese tipo de medios probatorios, esto es, la autenticidad y la certeza de lo que se quiere representar. En el asunto en estudio, de las fotografías aportadas no se puede determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas y carecen

de reconocimiento o ratificación (...)" (negrilla y subrayada fuera del texto original)

3. **Acaecido el accidente fue atendida mi poderdante por varias personas que trataron de auxiliarla, amén del reporte a la Central de Tránsito, donde se dio noticia del accidente sufrido; siendo atendida inicialmente en el sitio del accidente por El agente Gustavo A Posso, de la Secretaría de Movilidad del municipio, quien de inmediato determino el traslado a la Clínica Valle Salud Norte de esta ciudad, ante los politraumatismos que presentaba mi poderdante.:**

- Este hecho no le consta de manera directa al Distrito de Santiago de Cali y que el agente de tránsito Gustavo A Posso de la Secretaría de Movilidad del municipio, fuera atendido a la señora YENNIFER GALARZA HURTADO y que fuera hecho el acto humanitario de ayudar al traslado a la Clínica Valle Salud Norte de esta ciudad a la accidentada, no hace responsable al Distrito de Santiago de Cali.

4. **“El citado agente de tránsito que, atendido el accidente, levanto el Informe Policial De Accidente De Tránsito y el Croquis o bosquejo topográfico correspondiente No AOOI 189442, donde claramente informa como hipótesis del accidente de tránsito "HUECO EN LA VIA", código 306”.**

- Este hecho no nos consta de manera directa, pues no se demuestra que el accidente haya sido por “HUECO EN LA VIA”, además el informe del agente de Tránsito, no podrá tenerse como prueba, toda vez que el agente de tránsito no es testigo presencial del hecho, por lo tanto, esta no es prueba suficiente ni mucho menos determinante sobre la génesis, desarrollo y desenlace del hecho aquí reprochado.

Además, es imprescindible señalar que las hipótesis planteadas por el agente en el informe policial de accidente de tránsito, son simple presunciones y constituyen una apreciación subjetiva de como “posiblemente” se ocasiono el accidente ya que él no es testigo presencial del hecho.

Por lo tanto, tal documento en cuanto a su contenido material, deberá ser debatido dentro del curso procesal respectivo y tendrán el valor probatorio que el funcionario judicial le asigne. Así mismo, las fotografías aportadas no dan cuenta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en las que aparénteme ocurrió el hecho, por lo tanto, no podrán ser tenidas en cuenta por el Juez para acreditar la correnca del hecho.

5. **“Posteriormente fue objeto de conocimiento por parte de la Fiscalía General de Nación el asunto referido, a través de la Fiscal Local No. 59, quien, a pesar de la investigación desplegada, y dada la falla administrativa ocasionante del accidente**



de tránsito; en ausencia de una persona natural responsable del insuceso; que impacto la humanidad de mi poderdante, atiende el desistimiento propuesto, archivando el asunto penalmente”.

- Este hecho no nos costa ni es de incumbencia del Distrito de Santiago de Cali, ya que la Fiscal Local No. 59 es autónoma para decidir el archivando de sus investigaciones y sobre la falla administrativa es una presunción no probada del apoderado de la parte demandante.

6. “En el entretanto la señora Galarza Hurtado, recibió inicialmente atención medica con el siguiente diagnostico medico de inicio: FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA, QUEMADURAS DE MULTIPLES REGIONES Y FRACTURA DE LOS HUESOS DEL DEDO GORDO DEL PIE, CON TRAUMA EN EL CODO DERECHO, CON ESTIMAS DE SANGRO, CON LIMITADA MOVILIDAD, POSTERIOR DOLOR EVA 8/10; siendo inmovilizada e inicialmente con incapacidad medica de fres (03) días”:

- Este hecho no nos costa de forma directa, toda vez que el Distrito de Santiago de Cali no tiene un vínculo cercano con la demandante que le permita conocer sus intimidades o situaciones personales o de salud. Por lo anterior, es la parte actora quien debe acreditar lo aquí señalado

7. “La señora YENNIFER GALARZA HURTADO, posteriormente ha recibido atención medica de conformidad con la Epicrisis de la Clínica VALLE SALUD, ubicada en la ciudad de Cali”:

- Este hecho no nos consta, ya que el Distrito de Santiago de Cali no tiene ningún medio o canal que le permita o lo encamine a conocer la situación personal de salud de la demandante, de manera que la carga de su demostración recae única y exclusivamente sobre ella, debiendo acreditar tales afirmaciones a través de los medios probatorios que considere pertinentes.

8. “Dada la complejidad de las lesiones sufridas por la señora YENNIFER GALARZA HURTADO, a la fecha de la presente su diagnóstico arroja la siguiente anamnesis:

"PACIENTE DE 37 ANOS, CON AP DE TRAUMA EN PIERNA DERECHA POSTERIOR A ACCIDENTE DE TRANSITO EL 25/07/2020, CON FRACTURA EN EXTREMO DISTAL DE TIBIA MANEJADO CON OSTEOSINTESIS ABIERTA, FRACTURA DE PENOE EXTREMO PRXIMAL SIN MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CONSULTA PARA LECTURA DE RX PIERNA AP Y LATERAL DERECHA; SE IDENTIFICA TRAZO FACTURA A NIVEL TERCIO DEL HUESO TIBIA, CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE EXTREMO DISCAL PROXIMAL NORMOLPLANTADO SE OSERVA TRAZO DE FRACTURA EN EL TERCIO PROXIMAL Y MEDIAL DEL HUESO PERONEAL CON FORMACION DE CALLO OSESO” V DF PIE DERECHO DE CONTROL, LA CUAL FUE TOMADA EL 23/06/2022 LA CUAL REPORTA "PIERNA AP Y LATERAL DERECHA; SE IDENTIFICA TRAZO DE FRACTURA A NIVEL DEL



TERCIO DEL HUESO DE LA TIBIA, CON NÁTERIA.L RX DE CUELLO DE PIE DEECHO: SE IDENTIFICA IMAGEN ENRELACION A TRAZO DE FRACTURA CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ANIVEL TERCIO DISTAL DEL HUESO TIBIA", EN EL MOMENTO PACIENTE REFIERE PRESENCIA DE DOLOR SEVERO EN CARA DEL TERCIO NEDIO Y PROXAÍAL DE LA PIERNA DERECHA PARTE POSTERIOR, DIFICULTAD AL CORRER O CAMINAR POR MAS DE 10 MINUTOS”:

- Este hecho no nos consta, ya que el Distrito de Santiago de Cali no tiene ningún medio o canal que le permita o lo encamine a conocer la situación personal de salud de la demandante.
9. **“Como se puede observar las secuelas de la motricidad, movilidad e intensos dolores de mi poderdante han llevado a una sin razón de su actividad normal, más aún para una mujer cabeza de hogar que debe a pesar de su situación proveer para su sustento y el de su hija”:**
- Sobre este hecho como se ha manifestado en los hechos anteriores, a mi prohijada no le consta de manera directa las condiciones de salud, las intervenciones quirúrgicas ni mucho menos las supuestas lesiones sufridas por la señora YENNIFER GALARZA HURTADO.
10. **“Las lesiones sufridas por la señora YENNIFER GALARZA HURTADO le producen graves secuelas de carácter moral, material y un grave daño a la vida en relación, por cuanto su actividad familiar, social, laboral, obliga a tener que hacer grandes esfuerzos para reitero poder sostenerse en todos los aspectos de su vida y de su hija, generando perjuicios no solo materiales sino morales objetivas y de relación, reiterando de la señora Galarza Hurtado como de su hija”:**
- Este hecho no nos consta, ya que el Distrito de Santiago de Cali no tiene ningún medio o canal que le permita o lo encamine a conocer la situación personal, o de salud de la demandante, debiendo acreditar tales afirmaciones a través de los medios probatorios que considere pertinentes.
11. **“El artículo 90 de la Carta Magna declara que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas que para el caso eran responsables del manteniendo de, la malla vial que una vez ocurrido los hechos en mención fue reparada. Hubo que esperar un daño como el enunciado para su reparación. Sin más mientes”.**
- No es un hecho, es una apreciación de la norma y una afirmación dada sin sustento probatorio alguno.

12. “Estamos ante un conflicto de carácter particular y contenido económico susceptible de conocimiento por parte de la jurisdicción contencioso administrativa prevista en el artículo 86 del CCA y el mismo es susceptible de transacción y desistimiento”.

- No es un hecho, es una apreciación o interpretación de una norma jurídica por la parte demandante.

13. “Dado los hechos antes expuestos se presentó en tiempo solicitud de conciliación extrajudicial: convocando a la parte pasiva ante la Procuraduría General de la Nación, correspondiendo la actuación aludida al Procurador 166 Judicial II para asuntos administrativos de Cali”:

- No es un hecho, es una conclusión personal de la parte demandante.

14. “En fecha de audiencia celebrada el día 29 de agosto de 2022, no se pudo conciliar las pretensiones económicas expuestas en la solicitud de conciliación extrajudicial, declarando el Procurador Judicial 166, fallida y ordenando la devolución de documentos aportados y su archivo”:

- No es un hecho, es una conclusión personal de la parte demandante.

15. “Para los efectos referidos en el hecho precedente, el Procurador Judicial 166, profirió con el acta de la audiencia de conciliación extrajudicial, constancia y desarrollo de las resultas de la audiencia; para dar cumplimiento al requisito de procedibilidad en material judicial administrativa, como el asunto demandado”:

- No es un hecho, es una conclusión personal de la parte demandante.

16. “La demandante obrando en su propio nombre y en representación de su hija menor de edad, me ha otorgado poder especial amplio y suficiente, para que inicie y lleve a término la presente acción judicial”.

- Es un hecho cierto.

III.FRENTE A LAS “PRETENSIONES DECLARACIONES Y CONDENAS” DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por carecer de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que hagan viable su prosperidad.

En las pretensiones de la demanda hay desproporción del extremo actor por lucrarse, debido a que no logra, siquiera de forma sumaria, demostrar los elementos esenciales para que se configure la eventual responsabilidad en cabeza del Distrito de Santiago de Cali.

Para casos de lesiones el Consejo de Estado ha señalado por cada gravedad de lesión un monto máximo en salarios mínimos legales mensuales vigentes para los diferentes niveles de relación afectiva.

En el caso en mención no existen elementos materiales probatorios que den cuenta de la existencia de la ocurrencia del hecho, como tampoco la gravedad de lesión, ni mucho menos que la misma sea superior al 50% para que la parte actora solicite el máximo cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que resulta antitécnico solicitar perjuicios morales por una lesión inexistente.

IV. SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

La parte demandante estimo a la presentación de la demanda las cuantías así:

1. **A TITULO DE PERJUICIOS MORALES: el equivalente en pesos de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, para mi poderdante, y el equivalente en pesos de CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, para mi poderdante YENNIFER GALARZA HURTADO.:**

Me opongo a que se condene a la entidad demandada a indemnizar a los aquí demandantes por los supuestos daños morales sufridos toda vez que no hay responsabilidad.

Para casos de lesiones el Consejo de Estado ha señalado por cada gravedad de lesión un monto máximo en salarios mínimos legales mensuales vigentes para los diferentes niveles de relación afectiva.

En el caso en mención no existen elementos materiales probatorios que den cuenta de la existencia de la ocurrencia del hecho, como tampoco la gravedad de lesión, ni mucho menos que la misma sea superior al 50% para que la parte actora solicite el máximo cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que resulta antitécnico solicitar perjuicios morales por una lesión inexistente.

Vale la pena resaltar que el Honorable Consejo de Estado, no admite presunción alguna respecto a los ingresos de una persona, los cuales en este caso no se encuentran acreditados, tal como se precisó en Sentencia del 18 de julio de 2019, Sección Tercera, expediente No. 73001- 23-31-000-2009-00133-01 (44572).

Luego, al no existir prueba del ingreso económico del actor se torna improcedente su reconocimiento.

Además, debe tenerse en cuenta que se debe descontar el 66% de la incapacidad pues este porcentaje es asumido por la EPS.

Además, me opongo habida cuenta que los mismos son excesivos y desbordan los lineamientos establecidos en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado.

2. A TÍTULO DE PERJUICIOS MORALES: el equivalente en pesos de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, para mi poderdante, y el equivalente en pesos de CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, para la hija menor MARIA CATALINA PIZO GALARZA.:

Me opongo a que se condene a la entidad porque debe tenerse en cuenta el despacho que la parte actora pretende una doble indemnización por el mismo concepto, al solicitar perjuicios por daño a la salud y consecuentemente, daño a la vida en relación, pues el Consejo de Estado ha determinado que ambos tienen la misma génesis por lo que es improcedente reconocer a un mismo sujeto los dos perjuicios.

3. A TÍTULO DE DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN, el equivalente en pesos de CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo definitivo para mi poderdante YENNIFER GALARZA HURTADO.:

Me opongo a que se condene a las entidades demandadas a indemnizar a los aquí demandantes por daño a la vida en relación, el cual resulta a todas luces antitécnico.

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el mismo fue subsumido por daño a la salud y no se reconocerá como perjuicio independiente.

Para casos de lesiones el Consejo de Estado ha señalado por cada gravedad de lesión un monto máximo en salarios mínimos legales mensuales vigentes para los diferentes niveles de relación afectiva.

Debe tenerse en cuenta el despacho que la parte actora pretende una doble indemnización por el mismo concepto, al solicitar perjuicios por daño a la salud y consecuentemente, daño a la vida en relación, pues el Consejo de Estado ha determinado que ambos tienen la misma génesis por lo que es improcedente reconocer a un mismo sujeto los dos perjuicios.

En el caso en mención no existen elementos materiales probatorios que den cuenta de la existencia de la ocurrencia del hecho.

4. A TÍTULO DE DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN, el equivalente en pesos VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo, para la hija de mi poderdante MARIA CATALINA PIZO GALARZA.:

Me opongo a que se condene a las entidades demandadas a indemnizar a los aquí demandantes por daño a la vida en relación, el cual resulta a todas luces antitécnico.

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el mismo fue subsumido por daño a la salud y no se reconocerá como perjuicio independiente.

V.EXCEPCIONES

A- INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

La ocurrencia del accidente acaecido el día 25 de julio de 2019 no es atribuible a la entidad demandada, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

En primer lugar, no se encuentra acreditada la existencia de un hecho dañoso atribuible por acción u omisión a la demandada.

En segundo lugar, la mera enunciación de la producción de las lesiones personales no acredita la ocurrencia de una conducta antijurídica atribuida a la administración.

En tercer lugar, para que se logre obtener la declaratoria de responsabilidad, es indispensable que se acrediten los elementos esenciales mencionados anteriormente, no obstante, no existe una relación entre el hecho dañoso y la ocurrencia del daño.

Máxime, cuando la ocurrencia del supuesto bache, hueco u obstáculo no exime de responsabilidad a la conductora del vehículo, la aquí demandante, YENNIFER GALARZA HURTADO pues al ejercer una actividad considerada como peligrosa debió estar atenta a la vía, peatones y demás vehículos que transitaban por el lugar.

La responsabilidad civil del Estado se encuentra regulada en el artículo 90 de la Constitución Política que reza lo siguiente:

“ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”

De acuerdo a lo señalado anteriormente, para que se configure la responsabilidad en cabeza del Estado, debe existir una acción u omisión causada por este.

Sin embargo, en el caso concreto no se allegaron elementos materiales probatorios que den cuenta ni siquiera de la existencia de un hecho dañoso atribuible a la administración.

Además, es importante mencionar que cuando por acciones u omisiones se causa injustamente un daño a otro y existe además un factor o criterio de atribución, subjetivo por regla general y excepcionalmente objetivo, que permita trasladar dicho resultado dañoso a quien lo ha generado, surge a su cargo un deber de prestación y un derecho de crédito en favor de la persona que ha sufrido el detrimento.

Sin embargo, en el presente asunto no se han configurado los elementos que se requieren para la formación de dicha responsabilidad, tales como:

- (i) **Daño antijurídico:** El presunto daño que aquí se reprocha es la supuesta lesión que sufrió la señora YENNIFER GALARZA HURTADO, el cual por ningún motivo podrá atribuírsele al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

Se reitera, toda vez que no existe relación jurídica con el supuesto hecho que se reprocha en la demanda. Además, es menester indicar desde ya que, si bien puede existir un daño, el mismo no es antijurídico en tanto no es atribuible a la entidad demandada.

- (ii) **Acreditar la existencia de un hecho dañoso:** La conducta reprochada por la parte actora implicaría una supuesta omisión en el mantenimiento de la vía ubicada en la Calle 70 en la intersección de la Carrera 1ra, Barrio Alcázares de la Ciudad de Cali -Valle, lo cual no está probado, sin que una foto tenga la entidad de demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Bien puede ser la causa del accidente la falta de pericia en el manejo de la motocicleta que conducía la señora YENNIFER GALARZA HURTADO, pues al ejercer una actividad considerada como peligrosa debió estar atenta a las condiciones de la vía, peatones y demás vehículos que transiten por el lugar, para así poder maniobrar cualquier situación que se le presentara.

En ese sentido, al no estar probada la presunta conducta omisiva resulta inocuo proceder con el estudio del nexo causal.

Adicionalmente, es menester indicar al despacho que la presunta falta de mantenimiento de la vía donde aparentemente ocurrió el hecho objeto del litigio no se encuentra acreditada.

De tal suerte el único material probatorio que aporta la parte actora es el Informe Policial de Accidente de Tránsito y unas fotografías que no cuentan de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen a la ocurrencia del hecho. Por el contrario, de acuerdo a **las heridas de alto impacto** que presenta la señora GALARZA HURTADO, evidencian que se desplazaba a una alta velocidad

que le impidió maniobrar la motocicleta de manera adecuada y adicionalmente, que no se encontraba atenta en la conducción del vehículo.

- (iii) **La relación de causalidad entre los dos elementos:** Teniendo en cuenta lo señalado en los dos ítems anteriores, se evidencia que no existe nexo de causalidad porque, en primer lugar, no existen dentro del plenario elementos materiales probatorios tan siquiera sumarios que acrediten las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el supuesto hecho del día 25 de julio de 2020.

Por el contrario, se aportan unas fotografías que lo único que demuestran es que la conductora de la motocicleta se desplazaba por el carril izquierdo a una alta velocidad por el sector, lo que le impidió maniobra de manera correcta el vehículo.

En segundo lugar, las fotografías evidencian que la señora GALARZA HURTADO, no fue diligente y prudente al momento de conducir la motocicleta, pues no se encontraba atenta a las condiciones de la vía, lo cual se espera de un conductor de vehículo automotor, por ser esta una actividad peligrosa.

En conclusión, no existe responsabilidad a cargo del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI por no configurarse los elementos de la responsabilidad del Estado.

En efecto, no se allegaron elementos materiales probatorios de la ocurrencia del hecho, ni elementos que acreditaran que la señora GALARZA HURTADO haya sufrido un accidente.

Por el contrario, se reitera, con las fotografías aportadas se evidenció que la señora GALARZA HURTADO se desplazaba a una alta velocidad por el sector, **pues sus heridas son de alto impacto**, lo que le impidió maniobrar de manera correcta el vehículo y adicionalmente, que no fue diligente y prudente al momento de conducir la motocicleta, pues no se encontraba atenta a las condiciones de la vía. Es decir, no existe prueba de la supuesta conducta omisiva generadora del daño alegado y en ese sentido, no habrá argumentos jurídicos para imputar responsabilidad a DISTRITO. En ese contexto, solicito respetuosamente al Despacho se sirva declarar probada esta excepción.

De conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga procesal de acreditar los elementos de convicción suficientes para que el juez pueda establecer la existencia de responsabilidad en cabeza de quien se endilga, la tiene la parte demandante.

En el caso sub examine, la parte actora fundamenta todas las valoraciones de culpa en el Informe de Tránsito del accidente del 25 de julio de 2020. Al respecto, es necesario poner de presente que este documento carece del valor probatorio que le ha otorgado la parte actora, pues de ninguna manera puede valer como un dictamen de responsabilidad. El

agente que lo elaboró no fue testigo presencial del suceso, en consecuencia, sus conclusiones son meras observaciones e hipótesis, las cuales dejan en entre dicho la veracidad de lo sucedido con este caso. Situación que genera la presencia de irregularidades, lo que demuestra una clara inexistencia de prueba concluyente de responsabilidad del aquí demandado. Igualmente, es importante reseñar que el informe policial no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad, toda vez que el informe de tránsito tiene parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente como informante del suceso. Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera: “Artículo 149: El informe contendrá por lo menos: Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho. Clase de vehículo, número de la placa y demás características. Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados. Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos. Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos. Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas. Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado. Descripción de los daños y lesiones. Relación de los medios de prueba aportados por las partes.

Solicito al Despacho que se declare probada esta excepción.

B- INEXISTENCIA DE PRUEBA QUE ACREDITE LA FALLA EN EL SERVICIO ATRIBUIBLE AL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Dentro del plenario no existen elementos materiales probatorios tan siquiera sumarios que acrediten las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el supuesto hecho del día 25 de julio de 2020.

Por el contrario, se allega un Informe policial de accidente de tránsito, en el que se indica en las características de la vía, que se encontraba en buen estado, además, **el evento acaeció a las 4:53 P.M. horas , por lo que había buena visibilidad en el sector**, y de acuerdo a las condiciones atmosféricas los objetos podían visualizarse con mayor claridad, lo que hace presumir , que la señora GALARZA HURTADO , no se encontraba atenta a la vía y por ello, finalmente ocurre el hecho.

Por lo tanto, no existe responsabilidad del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI en los hechos objeto del presente litigio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga procesal de acreditar los elementos de convicción suficientes para que el juez

pueda establecer la existencia de responsabilidad en cabeza de quien se endilga, la tiene la parte demandante.

En el caso sub examine, la parte actora fundamenta todas las valoraciones de culpa en el Informe de Tránsito del accidente del 25 de julio de 2020.

Al respecto, es necesario poner de presente que este documento carece del valor probatorio que le ha otorgado la parte actora, pues de ninguna manera puede valer como un dictamen de responsabilidad.

El agente que lo elaboró no fue testigo presencial del suceso, en consecuencia, sus conclusiones son meras observaciones e hipótesis, las cuales dejan en entre dicho la veracidad de lo sucedido con este caso.

Igualmente, es importante reseñar que el informe del agente de tránsito no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad, toda vez que el informe de tránsito tiene parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente como informante del suceso.

Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

“Artículo 149:

El informe contendrá por lo menos:

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

Nombre del conductor o conductores,

documentos de identidad,

número de la licencia o licencias de conducción,

lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos. Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

Descripción de los daños y lesiones. Relación de los medios de prueba aportados por las partes.

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.

[...] Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes. (negrita fuera del texto original)

El artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimientos que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de la norma:

“ARTÍCULO 146. CONCEPTO TÉCNICO. Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.”

De los anteriores artículos, se deduce necesariamente, que el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis, ya que solo se trata de un criterio orientador de la investigación, pero no es prueba. Lo anterior, pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acredita y por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad.

En conclusión, ni el Informe del Agente de Tránsito, ni las fotografías aportadas, dan cuenta de las circunstancias que rodearon los hechos acaecidos el 25 de Julio de 2020.

Máxime, cuando las hipótesis planteadas por el agente en el informe policial de accidente de tránsito, son simple presunciones y constituyen la determinación de circunstancias subjetivas que, “posiblemente”, dieron origen al mismo. Se reitera, el agente no fue testigo presencial del hecho.

Además, las fotografías aportadas no dan cuenta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en las que aparénteme ocurrió el hecho, por lo tanto, no podrán ser tenidas en cuenta por el Juez para acreditar la correncia del mismo.

Así las cosas, no se logra acreditar la responsabilidad del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

Solicito al Despacho que se declare probada esta excepción.

- C- **HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA** Se plante esta excepción teniendo en cuenta que en el improbable y remoto evento que el despacho declare que las fotografías corresponden a la fecha, hora y lugar en la que ocurrió el hecho del 25 de Julio de 2020, de todas maneras, deberán negarse las pretensiones de la demanda. En las fotografías, por presentar heridas de alto impacto, se evidencia que la señora YENNIFER GALARZA HURTADO se desplazaba a una alta velocidad. Lo que con toda claridad indica que la señora GALARZA HURTADO no fue diligente, prudente y responsable a la hora de conducir la motocicleta en la que se desplazaba. Adicionalmente, se evidencia que la misma no se desplazaba por el carril derecho como lo consagra la norma. Por lo tanto, es evidente que la conducta de la señora GALARZA fue determinante en la producción del evento materia de esta controversia pues se expuso de manera irresponsable a su acaecimiento. De conformidad con lo señalado en el artículo 94 de la Ley 769 de 2002, las motocicletas deben desplazarse por el carril derecho, tal y como se cita a continuación: “(...) ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. (...) (negrilla y subrayada por fuera del texto original) Situación que brilla por su ausencia, pues en las fotografías allegadas por la parte actora, se evidencia que la motocicleta se desplazaba por la mitad de ambos carriles y por ello, finalmente impacta con el bache, hueco u obstáculo.

Habiendo enfatizado en lo anterior, ruego al Despacho tener en cuenta que el Consejo de Estado ha indicado que, cuando el comportamiento de la víctima ha sido contundente y determinante para el desarrollo de los hechos, como efectivamente se ha suscitado en este asunto, se rompe el nexo causal indispensable para que se configure la responsabilidad civil que en estos escenarios se deprecia.

Así lo ha manifestado el órgano de cierre de esta jurisdicción:

En cuanto a la alegada eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima, conviene recordar que, al igual que acontece con las demás eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, Por otra parte, a efectos de que operen las citadas eximentes de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de la víctima tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una

concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.

En conclusión, no existe responsabilidad a cargo del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI por encontrarse configurada la causal de eximente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de la víctima. Lo anterior, toda vez que fue su propio actuar, negligente e irresponsable, lo que la expuso de manera concreta a la ocurrencia del hecho y en ese sentido, no habrá argumentos jurídicos para imputar responsabilidad al Distrito.

En ese contexto, solicito respetuosamente al Despacho se sirva declarar probada esta excepción.

D- REDUCCIÓN DE LA EVENTUAL INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DE LA SEÑORA YENNIFER GALARZA HURTADO EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO.

En gracia de discusión y de manera subsidiaria, debe tenerse en cuenta que en el improbable y remoto evento en que se reconocieran una o algunas de las pretensiones esgrimidas por los demandantes, de todas maneras, debe aplicarse la respectiva reducción de la indemnización. Lo anterior, en proporción a la contribución que tuvo la señora YENNIFER GALARZA HURTADO en la ocurrencia del hecho. La conducta de la referida señora fue determinante en la producción del evento materia de esta controversia, pues se expuso de manera irresponsable a su acaecimiento. Máxime, cuando las fotografías aportadas demuestran que la motocicleta se desplazaba por el carril izquierdo y a exceso de velocidad y son estas conductas imprudentes que generan el impacto con el obstáculo. En ese sentido, sin perjuicio de que como ya se demostró en las anteriores excepciones, operó la causal eximente de responsabilidad denominada hecho de la víctima, lo cual imposibilita la imputación del supuesto hecho dañoso al demandado. Conforme a lo dicho, el Despacho debe establecer un análisis causal de las conductas implicadas en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia de la señora **GALARZA HURTADO** en la ocurrencia del daño. Lo anterior, a efectos de disminuir la indemnización si es que a ella hubiere lugar, en proporción a su contribución al supuesto daño que sufrieron los aquí demandantes. Así es como lo ha indicado la jurisprudencia en reiteradas ocasiones:

“De ahí que, la autoridad judicial demandada se encontraba habilitada para estudiar si se configuraba alguno de los eximentes de responsabilidad, entre los que se encuentra, el hecho de la víctima, como efectivamente lo hizo. Por ello, al encontrar que la actuación de la víctima directa concurrió en la producción del daño, decidió reducir el valor de la indemnización. De modo que, contrario a lo alegado por el actor, el juez de segunda instancia no desbordó el marco de su competencia y tampoco incurrió en el defecto sustantivo alegado.” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. C.P. Milton Chaves García. Radicación 2018-03357)

En distinto pronunciamiento, la misma Corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización.

Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción del 50% de los perjuicios según sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicación No. 43112:

“Todo ello, en pos de la responsabilidad que por el riesgo creado debe afrontar la entidad demandada –Fiscalía General de la Nación– implica que, en merecimiento de la culpa evidenciada de la víctima, se debe efectuar una reducción en la condena, la cual se estima, por el nivel de incidencia de la negligencia de los demandantes –propietarios de edificio donde funcionaba el centro comercial–, equivalente al 50% de los perjuicios que lleguen a probarse y concederse en favor de estas personas, ya que del mismo tenor del riesgo que reclaman, fue la imprudencia de los demandantes en la no evitación del daño.”(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En conclusión, tal como lo ha determinado la jurisprudencia, al encontrarse acreditado por medio de las pruebas que obran en el expediente que la conducta de la señora, fue determinante en la producción del evento materia de esta controversia pues se expuso de manera irresponsable a su acaecimiento, deberá declararse que el porcentaje de la causación del daño a lo sumo es del 50%. Toda vez que con las fotografías aportadas se demuestra que la motocicleta se desplazaba por el carril no autorizado por disposición legal, esto es, el carril izquierdo y a exceso de velocidad y son estas conductas imprudentes que generan el impacto con el bache. Pues es apenas lógico que si transitaban en contra de lo contenido en las disposiciones legales de tránsito pudiesen sufrir un accidente. Razón por la cual, de considerarse procedente una indemnización por los perjuicios deprecados, esta debe ser reducida conforme al porcentaje de participación de la conducta imprudente de la víctima en exponerse al peligro, como mínimo en un 50%. Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

E- IMPROCEDENTE CUANTIFICACIÓN DE PERJUICIOS MORALES. La tasación propuesta del daño moral es exorbitante y en tal virtud, no puede ser tomada en cuenta por el Despacho. La pretensión resulta excesivamente cuantificada al solicitarse la suma de cien (100) SMLMV, para la víctima directa, y sus padres y de cincuenta (50) SMLMV para la hija de la víctima directa. Petición que resulta antitécnica, pues no se aportó un documento o una sola prueba que diera cuenta de las supuestas secuelas psicológicas padecidas por la demandante, como tampoco se acreditó a través de prueba médica o dictamen de PCL que las secuelas que tuvo la señora GALARZA

HURTADO son equivalentes a las que ostenta una persona que es declarada en estado de invalidez.

Por ese motivo, no puede solicitar un reconocimiento igual al máximo en el caso de las lesiones más graves.

Por lo anterior y sin que signifique aceptación de responsabilidad alguna en cabeza de mi representada, en el evento que el honorable juez considere que sí se reúnen los elementos de la responsabilidad, comedidamente le solicito desestime la tasación exorbitante de perjuicios propuesta por la demandante.

Así pues, frente a los perjuicios morales solicitados en el líbello de la demanda, es preciso señalar que el Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, en torno a los montos del resarcimiento cuando se reclaman perjuicios inmateriales, sostuvo lo siguiente:

“La reparación moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas. (...) Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro. La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso. Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%, a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior a 10%”. (Énfasis propio).

Según la jurisprudencia citada, es inviable el reconocimiento de los perjuicios morales en las sumas pretendidas por la parte demandante. Solicitar (100) SMLMV, para la víctima y su hija resulta a todas luces exorbitante.

Máxime, cuando no existe documento que acredite la gravedad de la lesión, ni elementos materiales probatorios médicos o dictámenes equivalentes que permitan demostrar que la existencia de una secuela. En conclusión, es inviable el

reconocimiento por daño moral en las sumas pretendidas por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada.

En tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir de la unificación jurisprudencial del Consejo de Estado.

De ese modo, en tanto las sumas solicitadas en las pretensiones de la demanda desconocen los lineamientos establecidos por esa corporación y no se encuentran probadas, deben ser desestimadas.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

F- IMPROCEDENTE RECONOCIMIENTO DEL “DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN”.

En el escrito de la demanda se solicita el reconocimiento por “daño a la vida de relación”, sin embargo, el mismo resulta antitécnico e improcedente, toda vez que actualmente en la jurisdicción contenciosa administrativa no se encuentra reconocido como una tipología independiente de perjuicio inmaterial.

Por esta sencilla razón, no se puede reconocer valor alguno.

Además, en el presente asunto la parte actora también solicita se le reconozca perjuicios por daño a la salud de manera conjunta con daño a la vida en relación, lo que quiere decir, que se está solicitando dos indemnizaciones por el mismo concepto, por lo que es improcedente reconocer a un mismo sujeto los dos perjuicios.

Ahora bien, con el fin de explicar la tesis anteriormente señala, es importante iniciar señalando que la jurisprudencia del Consejo de Estado Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto del 2014. rad. No. 66001-23-31-000-2001-00731-01 /26251 solo reconoce tres (3) tipos de perjuicios inmateriales, los cuales son:

(...)

1. TIPOLOGÍA DEL PERJUICIO INMATERIAL

De conformidad con la evolución de la jurisprudencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoce tres tipos de perjuicios inmateriales:

- i) Perjuicio moral;
- ii) Daños a bienes constitucionales y convencionales.
- iii) Daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), derivado de una lesión corporal o psicofísica.

Por lo anterior, es claro que el perjuicio denominado “daño a la vida en relación” no es una tipología de perjuicio reconocida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, no hay lugar a reconocer a los aquí demandante ningún tipo de indemnización por esta mal llamada tipología de perjuicios.

Por otro lado, no puede la parte actora solicitar de manera conjunta perjuicios por daño a la salud y daño a la vida de relación, toda vez que, la jurisprudencia del Consejo de Estado sentencia del 28 de agosto del 2014. rad. no. 66001-23-31-000-2001-

00731-01 /26251, ha sido enfático en señalar que el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto y garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona, por lo tanto, este no es acumulable bajo ningún criterio con el daño a la vida en relación, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado:

“(…) Precedente – Perjuicio daño a la salud: (...) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (...) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (...)” (subrayado y en negrilla fuera del texto original)”

Así las cosas, **no es procedente jurídicamente que se indemnice por daño a la salud y por daño a la vida de relación**, cuando de acuerdo al análisis jurisprudencial se hace referencia al mismo daño. Por lo que generar ambas indemnizaciones en un mismo sujeto incurría en una doble indemnización, la cual está claramente prohibida por el Consejo de Estado:

(...) 5. PROHIBICIÓN DE PAGO DOBLE DE DAÑO O PERJUICIO INMATERIAL. Ningún daño o perjuicio inmaterial podrá ser indemnizado doblemente. (...)

No obstante, en el remoto e hipotético caso que el despacho decidiera adecuar la pretensión, la tipología del daño que más se asemeja a las reconocidas actualmente por el Consejo de Estado, sería el daño a la salud. Frente a lo cual, se reitera que el mismo tampoco es procedente máxime cuando no se allegaron pruebas que den cuenta de la existencia del perjuicio alegado o la gravedad de la supuesta lesión padecida. En conclusión, no hay elementos fácticos ni jurídicos para que el H. Despacho proceda a reconocer indemnización alguna a cargo de este concepto, pues, en primer lugar, no es una tipología indemnizable por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y, en segundo lugar, no es acumulable con daño a la salud, pues recordemos que se trata del mismo concepto. Y de acuerdo a los criterios jurisprudenciales, no es posible que un sujeto sea merecedor de doble indemnización pues va en contravía de los principios constitucionales.

Por lo tanto, es totalmente improcedente el reconocimiento de este perjuicio que la parte actora ha solicitado de manera errónea.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

G- GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito señor Juez declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el decurso del proceso, que se encuentre originada en la Ley o en el contrato por el cual se convocó a mi representada, incluida la de prescripción.

Lo anterior, conforme a lo estipulado en el **art 282 del Código General del Proceso** que establece: “En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

En ese sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción se deberá de manera oficiosa reconocerla en sentencia.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción

VI.MEDIOS DE PRUEBA

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

- **DOCUMENTALES**

- Copia del poder que me faculta para actuar como apoderado del Distrito de Santiago de Cali, con sus soportes administrativos.

- **RATIFICACION DE DOCUMENTOS DE TERCEROS:**

El artículo 262 del Código General del Proceso faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria.

Vale la pena resaltar que esta disposición establece una clara consecuencia jurídica ante el evento en que una parte solicite la ratificación del documento y ello no se lleve a cabo:

“(…) Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (…)”

Entonces, cabe resaltar que Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo.

En virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación.

VII. NOTIFICACIONES

- A la parte actora, y su apoderado, en las direcciones referidas en el escrito de la demanda.
- Al Distrito Alcaldía de Santiago de Cali C.A.M. Torre Alcaldía Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía, Piso 12 Teléfono: 8818590 Fax 8851141.

-Email:

notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Demandante: YENNIFER GALARZA HURTADO Y OTRO

jennifergalarza720@gmail.com

hoyosjf@hotmail.com

El suscrito las oirá en la Secretaría de su Despacho o en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía, localizada en el piso doce (12) del Centro Administrativo CAM.


Correos:

notificacionesjudiciales@cali.gov.co

cesarnegritudes@gmail.com

Telefono:3176541629

Cordialmente,



CESAR AUGUSTO VALENCIA PEÑA
C.C. No. 16.656.707 de Cali (V).
T.P. No. 93.986 del C.S. de la Judicatura.
Buzón de correo electrónico: cesarnegritudes@hotmail.com
No. Celular: 317 6541629



26/10/22, 10:31

Correo de Alcaldía de Cali - Fwd: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2022-00206-00



JURISOFT, Creación Procesos Judiciales <creacion.procesosjur@cali.gov.co>

Fwd: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2022-00206-00

Notificaciones Judiciales Alcaldía Cali <notificacionesjudiciales@cali.gov.co>

25 de octubre de 2022, 16:06

Para: Creación Procesos Judiciales JURISOFT <creacion.procesosjur@cali.gov.co>

Buena tarde

Para su conocimiento y trámite en Jurisoft.

Adjunto los archivos descargados de OneDrive.

----- Forwarded message -----

De: <jadmin06cli@notificacionesrj.gov.co>

Date: mar, 25 oct 2022 a las 13:37

Subject: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2022-00206-00

To: <notificacionesjudiciales@cali.gov.co>, <procjudadm58@procuraduria.gov.co>, <procesosnacionales@defensajudicial.gov.co>

JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE CALI

CALI (VALLE), martes, 25 de octubre de 2022

NOTIFICACIÓN No.2646

Señor(a):

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

email: notificacionesjudiciales@cali.gov.co; procjudadm58@procuraduria.gov.co; procesosnacionales@defensajudicial.gov.co

ALCALA (VALLE)

ACTOR: YENNIFER GALARZA HURTADO

DEMANDANDO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

RADICACIÓN: 76001-33-33-006-2022-00206-00

ACCION DE REPARACION DIRECTA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en la fecha 11/10/2022 se emitió Auto admite demanda en el asunto de la referencia.

Este documento notificado personalmente puede consultarse con el número de radicado en el enlace <https://samairj.consejodeestado.gov.co>. Enlace proceso en samai TRASLADO PARTE DEMANDADA. https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333006202200206007600133

Las respuestas y solicitudes pueden ser enviadas a través del siguiente correo electrónico: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por: FRANCISCO FERNANDO ORTEGA OTALORA

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c3487b0297&view=pt&search=all&permmsgid=msg-fs3A1747695197216736712&siml=msg-fs3A1747695197> 1/2